

electorales; que el haber designado el ayuntamiento á los fiscales casillas distintas de apuellas para que fueron nombrados, no ha privado á los quejosos del derecho de emitir un voto en las elecciones que iban á verificarse, quedando ileso, por tanto, la prerrogativa que consigna la fracción 1ª del artículo 35 de la Constitución para todo ciudadano, de votar en las elecciones populares; que no se ha explicado por los solicitantes en que consistió la violación de los artículos constitucionales 99, 39 y 109, ni aparece que hayan sido infringidos por alguno de los tres hechos que han dado origen á este recurso, pues que en nada se restringió por ellos la libertad de asociación que es objeto del artículo 99, ni constituyen ataque directo á la soberanía popular que reconoce el artículo 39, ó á la forma del Gobierno republicano representativo popular que el artículo 109 impone á los Estados: que si bien el C. Juez 2º suplente Lic. Ignacio Navarrete ha sido ya suspendido y consignado al Tribunal de Circuito de Guadalajara por haber decretado la suspensión de las elecciones municipales, existen otros procedimientos en este juicio, autorizados por dicho suplente, que dan lugar á que también por ellos se le ponga á disposición del Tribunal de Circuito: tales son haber calificado la legalidad de la recusación del Juez propietario y excusa del 1º suplente; así como haber opuesto resistencia á obedecer el acuerdo del C. Presidente de esta Corte, su entrega inmediata al 3º suplente, del expediente formado con motivo de este juicio.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 de la Constitución federal y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta. Primero: Es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 3º suplente de Distrito de Jalisco en 17 de Febrero de 1874, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los quejosos contra las leyes y actos que han motivado el presente recurso. Segundo: Se impone á los pe-

tionarios una multa de cien pesos. Tercero: remítanse al Tribunal de Circuito de Guadalajara las constancias conducentes de este recurso, para que surtan sus efectos en juicio de responsabilidad que se instruye al Lic. Ignacio Navarrete como Juez 3º suplente de Distrito.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Ianda*, secretario.

Es copia. México, Julio 4 de 1874.—*Alejo Gómez Eguiarte.*

CRIMINAL

Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco contra los CC. José Prieto, Lorenzo L. Torres y Alberto G. Bango, por sospechas de haber abierto una carta con objeto de extraer de ella unos documentos que se remitan al C. Administrador general de Correos.

Sentencia del C. Juez de Distrito

Guadalajara, Diciembre 15 de 1873.—No hay méritos para proceder contra los CC. José Prieto, Lorenzo Jones y Alberto Bango. Remítase ésta averiguación al Superior para su revisión.

El C. Juez 3º suplente de Distrito lo decretó y firmó.—*Trinidad Bonilla*—*Guadalupe J. Gallegos*, secretario.

Es copia. Guadalajara, Febrero 14 de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Febrero 10 de 1874.—No apareciendo indicio alguno en las anteriores diligencias que incline el ánimo judicial á creer que sea cierto que D. Toribio Liebana pusiera en esta Administracion principal de Correos, una comunicacion dirigida al C. Administrador general del propio ramo, conteniendo los documentos de que habla en su escrito de acusacion y en su declaracion, quejándose de que los CC. Administrador, Interventor y empleado subalterno, José Prieto, Lorenzo L. Jones y Alberto G. Bango, le violaron dicha comunicacion para sustraer tales documentos; no puede por lo mismo existir indicio de que se haya verificado esa violacion, y por esto el amplio y esencialmente lógico análisis que con notable instruccion hizo el C. Lic. José M^a Verca, defensor de los acusados, en su informe oral, no tiene réplica posible.

Por estas consideraciones, y con fundamento de la doctrina del Sr. Pascua en su Febrero, tomo 79, página 275 y siguientes; atendiendo al espíritu del artículo 1042 del Código penal, se resuelve:

Primero: Se confirma el auto de 15 de Diciembre último, pronunciado por el Juzgado de este Distrito, que declaró que no hay méritos para proceder, por violacion de correspondencia, contra los CC. José Prieto, Administrador principal, Lorenzo L. Jones, interventor y Alberto G. Bango, subalterno, empleados todos de esta oficina de correos.

Segundo: Quedan á salvo los derechos de los acusados para que los deduzcan contra Don Toribio Liebana, á fin de reparar el perjuicio que les hubiera venido por su inmotivada acusacion.

Tercero: Devuélvase al C. Lic. Verca los documentos que al aducir su informe presentó con calidad de devolucion.

Cuarto: Dése cuenta con estas diligencias á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y remítase copia de este auto y del relativo de 1^a instancia al «Semanario Judicial»

(Firmados.)—*Juan Robles Martinez*.—*Tomás Bravo*, secretario.

Es copia. Guadalajara, Febrero 14 de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El que suscribe, encargado interinamente de la Fiscalia, dice: que el Juzgado de Distrito de Guadalajara á peticion de parte, comenzó á instruir causa á los empleados del Correo CC. José Prieto, Lorenzo L. Torres y Alberto G. Bango, por sospechas de haber abierto una carta, con objeto de extraer de ella unos documentos que se remitian al C. Administrador general de Correos. Practicadas por el Juzgado las diligencias que consideró necesarias, y no encontrando mérito para continuar la averiguacion, en 15 de Diciembre del año próximo pasado, mando sobreseer y remitir para su revision al Tribunal de Circuito, las diligencias; despues de haber sustanciado el artículo que sobre apelacion interpuso en tiempo y forma el acusador.

Admitida la apelacion y oídas las partes en el Tribunal de Circuito, este con fecha 10 de Febrero del presente año, y despues de haberse desistido el acusador mencionado, confirmó el auto del Juez de 1^a instancia, dejando á los acusados sus derechos á salvo contra quien los acusó.

En vista de esta conformidad de sentencias; de lo prevenido en el artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y de que en concepto del que suscribe, no hay mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que han intervenido en estas diligencias, súplica á esta 1^a Sala se sirva declararlo así, dándolas por revisadas.

México, Marzo 6 de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 20 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juán J. de la Garza.*—*Simon Guzman.*—*Ignacio Altamirano.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 7 de 1874.—*Emilio Ordaz.*

JUICIO.

Seguido en el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. Rosalio Rentería, sobre que se obligue al Administrador principal del papel sellado, á recibir diez pesos en moneda de cobre, en pago de la contribucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Al examinar en el fondo la demanda intentada por D. Rosalio Rentería, para que se obligue á la Administracion de papel sellado á recibirle moneda de cobre en pago del papel sellado que le compre dicho demandante, el que suscribe no vió otra tendencia ni otra mira, al intentarse dicha acción, que el objeto muy loable y muy justo de no resentir un quebranto á consecuencia del bajo precio á que ha quedado reducido el cobre, por parte del interesado. Bajo este concepto, y segun el principio de que nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro, lo único que encuentra es que Rentería no acogió el camino directo, y que para no resentir él per-

juicio alguno, quiere que otro sea el que lo resienta, y escogió por este otro al Administrador del papel sellado, ó si se quiere, al Tesorero federal. En efecto, C. Juez; prescindiendo de si la moneda toda de cobre que circula en el Estado de Sinaloa, fué formal y debidamente emitida por disposicion legislativa del Congreso de la Union, ó por decreto del Ejecutivo de la misma con facultades bastantes, si la moneda toda ha sido emitida ó mejor, acuñada en las casas de moneda, y con el tipo, peso y ley previamente determinada. Desentendiéndonos por un momento de si el Estado tuvo ó no culpa en esto, y de si la falsificacion escandalosa que se ha hecho, sobre todo, en los últimos años, fué consentida por las autoridades del mismo, que era á quien inmediatamente tocaba vigilar en este asunto; debemos entrar en otro orden de consideraciones, que nos llevarán con mas precision á nuestro objeto. El resultado es que desde el principio de su emision, nunca la moneda de cobre ha tenido en el mercado un valor representativo, y cierto que nunca las transacciones mercantiles se han celebrado indiferentemente con moneda de cobre ó de otra especie. Sucesivamente y á medida que la falsificacion, no solo en el país sino aun en el extranjero, iba aumentando, en la misma proporcion iba bajando su valor mercantil, al grado de que en la actualidad no vale absolutamente nada, y esto no por que la ley diga esto ú lo otro, sino por que en materia de mercancías el mercado y el aprecio público es el que determina un valor. ¿Y quiere el Sr. Rentería que una oficina federal, solo por que lo es, admita una moneda que no tiene su valor representativo en el mercado? Pues hay mas C. Juez; el objeto de haberse acuñado cuartillas de cobre en Sinaloa, y *únicamente para Sinaloa*, como sucede y ha sucedido en otros Estados, ha sido con el fin de facilitar las pequeñas compras y ventas al menudeo, y como moneda puramente local. ¿Será pues justo, será equitativo (aun suponiendo que